



Asamblea General

Sexagésimo tercer período de sesiones

Documentos Oficiales

Distr. general
15 de diciembre de 2008
Español
Original: inglés

Sexta Comisión

Acta resumida de la 19ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el miércoles 29 de octubre de 2008 a las 15.00 horas

Presidente: Sra. Rodríguez Pineda (Vicepresidenta). (Guatemala)

Sumario

Tema 73 del programa: Responsabilidad penal de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión (*continuación*)

Tema 75 del programa: Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 60º período de sesiones (*continuación*)

La presente acta está sujeta a correcciones. Dichas correcciones deberán enviarse, con la firma de un miembro de la delegación interesada, y *dentro del plazo de una semana a contar de la fecha de publicación*, a la Jefa de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, oficina DC2-750, 2 United Nations Plaza, e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las correcciones se publicarán después de la clausura del período de sesiones, en un documento separado para cada Comisión.

08-57467 (S)



*En ausencia del Sr. Al Bayati (Iraq), la
Sra. Rodríguez Pineda (Guatemala)
Vicepresidenta, ocupa la Presidencia.*

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

**Tema 73 del programa: Responsabilidad penal
de los funcionarios y expertos de las Naciones
Unidas en misión (continuación) (A/C.6/63/L.10)**

1. **La Sra. Telalian** (Grecia) presenta el proyecto de resolución A/C.6/63/L.10, relativo a la responsabilidad penal de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión en nombre de la Mesa, y dice que fue examinado en consultas oficiosas y por el Grupo de Trabajo sobre responsabilidad penal. El texto se basa en la resolución 62/63 de la Asamblea General e incorpora elementos adicionales encaminados a mejorar la cooperación internacional. Se establecen en el proyecto de resolución algunos principios generales a este respecto sin tratar de crear nuevas obligaciones positivas que podrían tener consecuencias para las actividades de la Organización.

2. El cuarto párrafo del preámbulo es nuevo y en él se reconoce la valiosa contribución de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión para el cumplimiento de los principios y propósitos de la Carta. En los párrafos 9 y 10 del preámbulo, que son también nuevos, se reafirma la necesidad de preservar la imagen, credibilidad, imparcialidad e integridad de las Naciones Unidas y se hace hincapié en los efectos perjudiciales de los delitos cometidos por esas personas para el cumplimiento del mandato de las Naciones Unidas. En el undécimo párrafo del preámbulo se hace referencia a la resolución 62/214 de la Asamblea General relativa a la Estrategia amplia de las Naciones Unidas sobre la asistencia y el apoyo a las víctimas de la explotación y los abusos sexuales cometidos por personal de las Naciones Unidas y personal asociado. Se ha añadido un nuevo párrafo duodécimo a fin de poner de relieve la necesidad de mejorar la cooperación internacional para asegurar la exigencia de responsabilidades penales a los funcionarios y los expertos de las Naciones Unidas en misión. Finalmente, en el penúltimo párrafo del preámbulo se recuerda la resolución 62/63 y en el último se hace referencia a la causa de la justicia.

3. En el párrafo 5 de la parte dispositiva, que es nuevo, se alienta a los Estados a que se presten asistencia mutua en relación con investigaciones o

procesos penales o procedimientos de extradición; exploren formas de facilitar la posible utilización de la información y el material obtenido de las Naciones Unidas; ofrezcan protección efectiva a las víctimas y testigos de delitos graves presuntamente cometidos por funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión, así como a las demás personas que proporcionen información al respecto; y estudien formas de responder adecuadamente a las solicitudes de apoyo y asistencia formuladas por los Estados anfitriones con miras a reforzar su capacidad. En el párrafo 8 se decide que se siga examinando el informe del Grupo de Expertos Jurídicos, en particular sus aspectos legales, durante el sexagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General, en el marco de un grupo de trabajo de la Sexta Comisión.

4. En el nuevo párrafo 10 se pide a las Naciones Unidas que consideren medidas adecuadas para facilitar la posible utilización de información y material en los procesos penales incoados por los Estados, teniendo presente el respeto de las debidas garantías procesales. El párrafo 11, que también es nuevo, se refiere a la adopción de las medidas adecuadas para restablecer la credibilidad y reputación de los funcionarios y expertos en misión cuando se determine en una investigación administrativa de las Naciones Unidas que las denuncias contra ellos son infundadas. El párrafo 12 se refiere al suministro de información y material a los efectos de los procesos penales incoados por los Estados y en el párrafo 13 se hace hincapié en la necesidad de abstenerse de adoptar medidas de represalia contra los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión que presenten denuncias.

5. En el párrafo 14, la Asamblea General toma nota con reconocimiento de la información suministrada por los gobiernos en respuesta a su resolución 62/63, y en los párrafos 15 y 16 pide al Secretario General que le presente un informe sobre la aplicación del proyecto de resolución en su sexagésimo cuarto período de sesiones e indica la información que debe contener el informe. Por último, en el párrafo 17, se decide incluir el tema titulado “Responsabilidad penal de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión” en el programa provisional del sexagésimo cuarto período de sesiones.

6. La Sra. Telalian agradece a las delegaciones su participación constructiva en las negociaciones del proyecto de resolución y su espíritu de cooperación, y

espera que el proyecto de resolución se apruebe sin someterse a votación.

Tema 75 del programa: Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 60° período de sesiones (*continuación*) (A/63/10)

7. **La Sra. Ioannou** (Chipre), hablando sobre el tema “Efectos de los conflictos armados en los tratados”, dice que su delegación apoya la orientación general y la lógica del proyecto de artículos aprobado en primera lectura por la CDI en su 60° período de sesiones, que refleja el principio de la continuidad de los tratados durante un conflicto armado y la necesidad de salvaguardar el orden y la estabilidad pese a esas hostilidades. A ese respecto, apoya el principio del proyecto de artículo 9, que preserva el deber de un Estado de cumplir sus obligaciones con arreglo al derecho internacional independientemente de un tratado, y la inclusión en el artículo 2 de conflictos internacionales y no internacionales. La tarea de codificación debe tener el mayor alcance posible, teniendo presente que los conflictos tradicionales interestatales han sido sustituidos en gran medida por otros tipos de conflictos.

8. Apoya también la disposición contenida en el artículo 13, en que se prevé la suspensión de un tratado si éste es incompatible con el derecho de legítima defensa de un Estado, y cree que el ámbito de aplicación del artículo debe hacerse también extensivo a las situaciones en que el Estado en cuestión tiene la intención de dar por terminado el tratado o retirarse de él. Otro factor que crea susceptibilidad a dar por terminado un tratado, retirarse de él o suspender su aplicación es la violación grave de un tratado por uno de los beligerantes.

9. Su delegación está de acuerdo en que, como se establece en el artículo 15, el Estado agresor no podrá dar por terminado un tratado, retirarse de él ni suspender su aplicación como consecuencia de un conflicto armado si ello redundase en beneficio de ese Estado. Partiendo del supuesto de que no sea exhaustiva, apoya la lista de categorías de tratados que no pueden resultar afectados por un conflicto armado. Sin embargo, hay dos aspectos del proyecto de artículos que es preciso aclarar, a saber, en primer lugar, los efectos de los conflictos armados en las relaciones convencionales entre Estados beligerantes, a diferencia de las relaciones convencionales entre Estados beligerantes y no beligerantes; y en segundo

lugar, el mecanismo para la reanudación de la aplicación de los tratados suspendidos. La posibilidad de interrupción de las relaciones convencionales con terceros Estados merecería una consideración más detenida.

10. **La Sra. Belliard** (Francia) dice que la Comisión de Derecho Internacional debe seguir concentrándose en los aspectos de fondo del derecho internacional consuetudinario y la codificación de ese derecho y no en la aplicabilidad relativa o el estudio exclusivamente teórico de cuestiones que no pueden todavía codificarse. Expresa su satisfacción por los debates productivos que han tenido lugar como parte de la conmemoración del sexagésimo aniversario de la CDI y espera que haya más intercambios de ese tipo en el futuro.

11. Es también motivo de satisfacción la aprobación por la CDI en segunda lectura del proyecto de artículos sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos, y su delegación apoya el planteamiento en dos fases del seguimiento recomendado por la CDI. Dado el carácter sumamente técnico del tema y las cuestiones científicas básicas de que se trata, el proyecto de artículos debe ser examinado detenidamente por los Estados Miembros de manera que la Asamblea General pueda determinar en una etapa ulterior si sería apropiado elaborar una convención general. Felicita a la CDI por haber aprobado en primera lectura el proyecto de artículos sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados, sobre el cual su delegación presentará observaciones detalladas por escrito.

12. Con respecto al tema de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado, su codificación sería útil en razón de la existencia de una cantidad importante de normas consuetudinarias y la necesidad de certeza jurídica. Su delegación apoya la opinión del Relator Especial sobre el alcance del tema, tal como se establece en su informe preliminar (A/CN.4/601). Deben quedar incluidos todos los funcionarios del Estado, aunque es necesario ocuparse por separado de los altos funcionarios. La labor de la CDI sería mucho menos pertinente si se limitara a los jefes de Estado y de gobierno y los ministros de relaciones exteriores. Además, las inmunidades de los agentes diplomáticos, los funcionarios consulares, los miembros de misiones especiales y los representantes de los Estados en y ante las organizaciones internacionales están fuera del alcance del tema. Tampoco debe encararse la cuestión

de los familiares de los funcionarios del Estado, ya que no disfrutaban de inmunidad con arreglo al derecho internacional consuetudinario.

13. El tema debe limitarse a la inmunidad de los funcionarios del Estado de la jurisdicción penal extranjera. La cuestión de la inmunidad de la jurisdicción del Estado de nacionalidad del funcionario en cuestión incumbe solamente a ese Estado. La inmunidad ante los tribunales penales internacionales debe también excluirse del alcance del tema, ya que esos tribunales tienen sus propias normas con respecto a las inmunidades. Por último, la CDI debe examinar las inmunidades de que disfrutaban no sólo los funcionarios en activo sino también los ex funcionarios.

14. Los adelantos recientes en lo que concierne a la jurisdicción universal o cuasiuniversal son una de las razones que explican la pertinencia de la cuestión de la inmunidad de los funcionarios gubernamentales. Sin embargo, no son la única razón. En el caso de delitos cometidos en el extranjero, se puede reconocer que un Estado tiene jurisdicción penal por otras razones, en particular la nacionalidad de la víctima. Sin embargo, es crucial que no haya confusión entre la jurisdicción universal y la inmunidad. Como señaló la Corte Internacional de Justicia en el asunto *Arrest Warrant*, las normas que rigen la jurisdicción de los tribunales nacionales deben distinguirse cuidadosamente de las que rigen las inmunidades jurisdiccionales: la jurisdicción no implica ausencia de inmunidad, en tanto que la ausencia de inmunidad no implica jurisdicción. La CDI debe tener siempre presente esa distinción cuando examina la cuestión de las posibles excepciones a la inmunidad en el derecho internacional consuetudinario.

15. La distinción entre inmunidad *ratione personae* y la inmunidad *ratione materiae* es crucial, no sólo con respecto al fundamento de la inmunidad, que es principalmente funcional, sino también con respecto al alcance de las inmunidades que puede alegar un funcionario dependiendo de su rango en el Estado. Esa distinción debe mantenerse y perfeccionarse. La CDI debe examinar los criterios para determinar qué funcionarios pueden disfrutar de inmunidad *ratione personae*, especialmente teniendo en cuenta los fallos de la Corte Internacional de Justicia.

16. Por último, expresa su interés en los estudios de la CDI del efecto de la inmunidad en la fase de instrucción y considera que la cuestión de la

inviolabilidad de los funcionarios del Estado debe estar incluida en el alcance del estudio, teniendo en cuenta los vínculos estrechos entre los conceptos de inviolabilidad e inmunidad.

17. Con respecto al tema de la expulsión de los extranjeros, las dos cuestiones tratadas en 2008 han desviado en alguna medida a la CDI de la esencia del tema. En cuanto concierne a la primera cuestión, a saber, la expulsión de personas con doble nacionalidad o nacionalidad múltiple, el trato dado a esas personas no debe ser diferente del que se da a otros nacionales. En consecuencia, el principio de la no expulsión de nacionales debe aplicarse a las personas con una o más nacionalidades. No es necesario un proyecto de artículo separado sobre ese punto, ya que la cuestión puede aclararse en el comentario al proyecto de artículo 4. Con respecto a la segunda cuestión, la pérdida de la nacionalidad y la privación de la nacionalidad en relación con la expulsión, está de acuerdo con la opinión del Relator Especial de que no hay ninguna razón para elaborar un proyecto de artículo específico. Bastaría con referirse en los comentarios a las normas relativas a la nacionalidad, teniendo al mismo tiempo en cuenta el hecho de que las cuestiones de la pérdida de la nacionalidad o la privación de la nacionalidad se plantean independientemente de la posible expulsión futura de la persona.

18. Refiriéndose al tema de las reservas a los tratados, dice que la aprobación por la CDI de un gran número de proyectos de directrices contribuiría sin duda a hacer de la Guía de la práctica un documento exhaustivo. En cuanto a las cuestiones específicas sobre las cuales la CDI está solicitando las opiniones de los gobiernos, hay que hacer una distinción entre los efectos jurídicos de las declaraciones interpretativas y de las reservas y esa distinción debe tenerse presente cuando se considera la cuestión de las reacciones a las declaraciones y a las reservas y sus efectos respectivos. El sistema de reservas, aceptaciones y objeciones está sujeto a las normas del derecho de los tratados cuyos tecnicismos jurídicos han sido ilustrados por la CDI en su labor actual. Lo mismo no es enteramente cierto cuando se trata de las declaraciones interpretativas y las reacciones a ellas, que a veces forman parte de un contexto más amplio que el tratado particular con el que guardan relación y se refieren a la forma en que los Estados interpretan sus derechos y obligaciones en el ámbito del derecho internacional. Su delegación apoya por eso la cautela del Relator Especial con respecto a la

preparación de un estudio de la teoría general de la aquiescencia para los fines del proyecto actual. De la misma manera, las consideraciones de fondo sobre la analogía entre la aprobación de una declaración interpretativa y el acuerdo entre las partes sobre la interpretación de un tratado irían mucho más allá de lo que es necesario en un proyecto de texto sobre las reservas a los tratados.

19. Sin embargo, es válido hacer una distinción entre diferentes tipos de reacción, a saber, aprobación, desaprobación, silencio y reclasificación, aunque los efectos de cada uno plantea problemas diferentes. Hay circunstancias en que el silencio en respuesta a una declaración interpretativa puede interpretarse como aquiescencia. Sin embargo, como se indica en los proyectos de directrices 2.9.8 y 2.9.9, la aceptación de una declaración interpretativa no puede presumirse ni puede inferirse del mero silencio. Hay circunstancias específicas en que el silencio o la conducta de un Estado como un interés directo y sustancial en el detalle o la aclaración que proporciona la declaración interpretativa de otro Estado contratante se tendría inevitablemente en cuenta para los fines de la interpretación del tratado, por ejemplo, en el caso de una controversia entre los contratantes. Sin embargo, el silencio, cuando no constituye aquiescencia a una declaración interpretativa, no puede tener ningún papel en los efectos jurídicos que la declaración puede producir. En todo caso, la opción que tienen los Estados contratantes para aclarar o especificar el sentido de un tratado o de determinadas disposiciones de un tratado no debe ignorarse.

20. Por último, en lo que respecta a las consecuencias de una declaración interpretativa para un Estado que aprueba o que se opone expresamente a ella, bastaría con una referencia general a las normas consuetudinarias sobre la interpretación de los tratados. En general, las reacciones a las declaraciones interpretativas no pueden plasmarse rígidamente en normas sustantivas. Salvo en los casos en que uno u otro de los Estados contratantes reclasifica una declaración interpretativa como reserva, con lo cual el debate pasa a situarse en área de los efectos de las reservas, hay una flexibilidad inherente en el sistema de las declaraciones interpretativas y las reacciones que ellas producen, de conformidad con la función esencial que desempeñan en la vida de un tratado la intención de las partes y su interpretación del tratado.

21. Su delegación considera muy interesante la labor reciente de la CDI sobre los tratados en el tiempo, y especialmente la cuestión del acuerdo y la práctica ulteriores. Sería muy útil especificar las características de la norma consuetudinaria sobre la interpretación de los tratados codificada en el párrafo 3 a) y b) del artículo 31 de la Convención de Viena de 1969. Es importante identificar con precisión los procesos que podrían introducir cambios en el derecho internacional escrito, en particular en lo que respecta a consideraciones distintas del acuerdo o la práctica de las partes que a veces se toman en cuenta para los fines de la interpretación evolutiva de los tratados.

22. **El Sr. Tavares** (Portugal) dice, refiriéndose a los nuevos temas, que su delegación duda todavía de que la “cláusula de la nación más favorecida” sea una elección apropiada, pero aprueba la inclusión del tema “los tratados en el tiempo”. Otros temas, como el *jus cogens*, revisten también gran importancia para la consolidación del derecho internacional.

23. Le complacen los esfuerzos realizados para hacer más accesible el informe de la CDI y aprecia las iniciativas recientes encaminadas a revitalizar el debate sobre la labor de la CDI, como por ejemplo, la reunión celebrada en Ginebra como parte de las celebraciones del sexagésimo aniversario de la Comisión de Derecho Internacional y los diálogos interactivos y reuniones oficiosas de asesores jurídicos celebrados durante las sesiones de la Asamblea General. Sin embargo, es preciso tomar más medidas para mejorar la interacción entre la CDI y los gobiernos. Por ejemplo, las intervenciones de los gobiernos en el Sexta Comisión deben ponerse a disposición de los miembros de la CDI, en particular los Relatores Especiales, y debe mejorarse el acceso a los documentos de la Comisión. Sería también útil mejorar el sitio web de la Comisión. A fin de lograr estos objetivos, es esencial la cooperación activa entre la CDI y la Secretaría.

24. Pasando al tema de los recursos naturales compartidos, dice que el proyecto de artículos sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos es equilibrado y está en consonancia con el derecho internacional contemporáneo. La forma final del proyecto de artículos debe ser un convenio marco internacional. Su delegación aprueba por eso la recomendación de la CDI de que la Asamblea General considere en una fase ulterior la posibilidad de elaborar una convención. Sin embargo, la CDI debe decidir qué significa “en una fase ulterior”, teniendo presente la necesidad de

estabilizar la reglamentación con respecto a los acuíferos transfronterizos.

25. Por último, dadas las similitudes evidentes, en términos jurídicos y geológicos, entre las aguas subterráneas y el petróleo y el gas, y la importancia del tema del petróleo y el gas en las relaciones internacionales contemporáneas, su delegación alienta a la CDI a prestar atención a ese tema.

26. En cuanto concierne a los efectos de los conflictos armados en los tratados, complace a su delegación el hecho de que la mayor parte de las preocupaciones que expresó anteriormente se hayan encarado en el proyecto de artículos. Le complace en particular: que la “intención” ya no sea el criterio predominante para determinar la susceptibilidad de los tratados a la terminación o suspensión; la exclusión de las organizaciones internacionales del ámbito de aplicación del proyecto de artículos; el carácter no exhaustivo de la lista de categorías de tratados que no pueden darse por terminados ni suspenderse en caso de conflicto armado; y el enfoque adoptado en los proyectos de artículos 8 a 12. Sin embargo, sigue habiendo algunas cuestiones fundamentales que es preciso encarar. El alcance del tema no debe ampliarse para abarcar situaciones de conflicto armado interno o situaciones en las que sólo una de las partes en un tratado es parte en un conflicto armado, que ya se tratan adecuadamente en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En esa situación, dado que sólo uno de los Estados prevé dificultades para aplicar el tratado, la cuestión que es preciso encarar se relaciona con la dificultad o imposibilidad de cumplir el tratado. En el caso de un conflicto armado actual entre partes en un tratado, la cuestión de que se trata es el nivel de confianza necesario para la ejecución normal del tratado.

27. Su delegación comparte la opinión de que no se puede tratar de la misma manera a un Estado agresor y a un Estado que ejerce su derecho de legítima defensa cuando se trata de determinar la legalidad de la conducta. Sin embargo, el tema debe mantenerse dentro del marco del derecho de los tratados y no deben tratarse cuestiones relacionadas con el derecho al uso de la fuerza. A este respecto, le preocupan los intentos de vincular el proyecto de artículos a una definición de la agresión, como se hace en el proyecto de artículo 15. El grupo de trabajo especial de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma

de la Corte Penal Internacional sobre el crimen de agresión está trabajando en la definición del término “crimen de agresión” y es importante evitar que haya múltiples definiciones para fines diferentes. Es recomendable por tanto un enfoque cauteloso.

28. Su delegación presentará observaciones detalladas sobre el proyecto de artículos oportunamente.

29. **La Sra. Lijnzaad** (Países Bajos) felicita a la Comisión de Derecho Internacional por haber finalizado el proyecto de artículos sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos. La reglamentación internacional de los usos de los recursos naturales compartidos tiene enorme importancia para su país, que comparte muchos de esos recursos con otros Estados. Alienta a la CDI a seguir trabajando sobre el tema.

30. Sin embargo, lamenta que no se haya prestado atención a la mayor parte de las observaciones y comentarios formulados por los Países Bajos y otros Estados. En particular, los Países Bajos hicieron observaciones sobre la obligación de considerar la indemnización si ha causado un daño importante, pese a haber actuado con la diligencia debida; la obligación de abstenerse, previa solicitud de realizar o permitir que se realice la actividad proyectada durante las consultas; y la obligación de prestar cooperación científica, técnica, logística y de otra clase a los Estados que sufran una emergencia. Pese a estas omisiones, su delegación apoya el planteamiento en dos fases para la consideración del proyecto de artículos y está dispuesta a iniciar negociaciones sobre la aprobación de una resolución sobre el tema durante el actual período de sesiones de la Asamblea.

31. En el anterior período de sesiones de la Asamblea, su delegación afirmó su reconocimiento de la importancia teórica del tema de los efectos de los conflictos armados en los tratados; sin embargo, no está aún convencida de la necesidad de ocuparse del tema, ya que los conflictos armados recientes no han causado aparentemente grandes problemas con respecto al derecho de los tratados. No solamente cuestiona la pertinencia práctica del proyecto de artículos sino que piensa, además, que es preciso reconsiderar si los artículos contribuirían realmente a promover la seguridad y la estabilidad en las relaciones jurídicas entre sujetos del derecho internacional.

32. Le preocupa el alcance del nuevo tema propuesto, “los tratados en el tiempo”. Sería difícil acabar un plan tan ambicioso y amplio en el quinquenio actual. Insta a la CDI a reconsiderar el alcance del proyecto y tratar de lograr resultados de carácter práctico. El proyecto no sería tampoco recomendable si llevara a la reconsideración del derecho de los tratados existente. Fuera de las situaciones en que se formalizara un tratado por un plazo limitado, la intención de las partes en un tratado sería que durara indefinidamente. Además, se entiende que un tratado estaría en vigor y seguiría necesariamente existiendo pese a las circunstancias cambiantes, las interpretaciones que evolucionan o la práctica ulterior.

33. Los conceptos de práctica ulterior y acuerdo ulterior parecen utilizarse casi como sinónimos en gran parte del texto. Sin embargo, es preciso distinguir entre la práctica ulterior, en que la cuestión es que ocurre con frecuencia que la práctica no es fácilmente accesible y no se desarrolla de manera organizada y consciente, y el acuerdo ulterior, que implica que se han tomado decisiones para desarrollar deliberadamente el derecho. Los dos conceptos deben encararse por separado.

34. Pide que se actúe con prudencia al tratar la “cláusula de la nación más favorecida”, que podría requerir un análisis más amplio. La interpretación de la cláusula no es sólo una cuestión de derecho internacional sino también del ámbito más especializado del derecho económico internacional. Además, dado que la mayor parte de la jurisprudencia pertinente es confidencial, la disponibilidad de material para la investigación propuesta podría ser limitada.

35. **El Sr. Ehrenkrona** (Suecia), hablando en nombre de los países nórdicos sobre las reservas a los tratados, dice que apoyan el concepto general de examinar a fondo las declaraciones y reacciones interpretativas a los tratados en conjunción con la consideración de las reservas. El empleo de declaraciones interpretativas está muy difundido y son demasiados los casos en que causan dificultades a causa de su similitud. Una guía de la práctica en materia de reservas no estaría completa si no se ocupara también del uso de las declaraciones interpretativas.

36. Sin embargo, es necesario actuar con prudencia cuando se encara el tema. Es preciso aplicar en su totalidad las normas existentes de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Según

el artículo 2 de la Convención, una reserva es una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones de un tratado. Las palabras cruciales son “cualquiera que sea su enunciado o denominación”. Una declaración interpretativa es de hecho “una reserva disfrazada” y debe tratarse como una reserva y no como una nueva categoría. La palabra “recalificación” puede dar lugar a interpretaciones incorrectas y podría dar la impresión de que en algún momento, la “reserva disfrazada” puede haber sido o ha sido de hecho una declaración interpretativa hasta que fue recalificada. El objetivo real debe ser “interpretar” la declaración interpretativa y decidir si tiene o no por fin excluir o modificar los efectos jurídicos de las disposiciones del tratado. Cuando se llega a la conclusión de que se ha hecho una “verdadera” declaración interpretativa, los Estados tienen la oportunidad de reaccionar, pero ello no es obligatorio. Por otra parte, si la declaración constituye una reserva, los Estados están obligados a actuar si desean expresar una objeción. Si es incompatible con el objeto y fin del tratado, la reserva no tiene efecto jurídico, aun sin objeciones.

37. La práctica de separar las reservas inválidas de la relación convencional entre los Estados interesados se ajusta plenamente al artículo 19 de la Convención de Viena. La opción de separación da seguridad a las relaciones convencionales bilaterales y abre la posibilidad de diálogo dentro del régimen del tratado.

38. Con respecto a las declaraciones interpretativas condicionales, los países nórdicos están de acuerdo con el concepto del proyecto de directriz 1.2.1 de que son, en buena parte, similares a las reservas y deben en consecuencia tratarse muchas veces como tales. Sin embargo, las declaraciones interpretativas condicionales son diferentes porque pueden considerarse declaraciones interpretativas si la interpretación contenida en ellas es aceptable.

39. En el caso de una declaración interpretativa “verdadera”, el proyecto de directriz 2.9.8 constituye una inclusión prudente, ya que declara el hecho evidente de que ni la aprobación ni la oposición a una declaración interpretativa deben presumirse. No puede darse a las declaraciones interpretativas verdaderas una relevancia mayor que la que tendrían con arreglo a las normas que rigen la interpretación de los tratados. Conforme se establece en el primer párrafo del

proyecto de directriz 2.9.9, el consentimiento a una declaración interpretativa no podrá inferirse del mero silencio de un Estado ante una declaración interpretativa relativa a un tratado formulada por otro Estado. No es tampoco útil tratar de crear un régimen separado en que la aquiescencia pueda desempeñar un papel específico con respecto a las declaraciones interpretativas. Dado que la aprobación de una declaración interpretativa constituye acuerdo ulterior acerca de la interpretación de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo 31 de la Convención de Viena de 1969, las normas generales que rigen la manera de formalizar un tratado son suficientes.

40. En resumen, la diferencia entre una reserva y una declaración interpretativa reside principalmente en el significado que se atribuye al silencio. El silencio ante una reserva constituye aceptación, con la única excepción de las reservas que van que son contrarias al objeto y fin del tratado, en tanto que el silencio ante una declaración interpretativa nunca puede dar lugar a efectos jurídicos más allá de los contenidos en las normas existentes sobre interpretación de los tratados.

41. **La Sra. Defensor-Santiago** (Filipinas) dice que sus observaciones sobre la guía de la práctica en materia de reservas a los tratados se concentrarán en la directriz 2.1.9, relativa a la expresión de la motivación (A/63/10, párr. 124). Esta directriz puede interpretarse en el sentido de que si una parte elige la opción de formular una reserva, estará obligada a indicar las razones. Sin embargo, es probable que el Estado o la organización internacional haga lo posible para evitar hacerlo y prefiera no seguir la directriz. El comentario de la CDI en el sentido de que la directriz no hace más difícil la formulación de reservas no es así muy realista.

42. El párrafo 1 d) del artículo 2 de las Convenciones de Viena de 1969 y de 1986, en que la reserva se define como una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación que refleja la intención del Estado que la formula, entraña una amplia gama de razones, que implican un ejercicio de la soberanía para determinar las relaciones jurídicas de las partes mediante reservas. Cabe preguntarse si la condición se satisface cuando una parte en un tratado formula una reserva con arreglo a lo establecido en una directriz (el proyecto de directriz 2.1.9, en virtud de la cual es preciso indicar los motivos por los cuales se hace).

43. Refiriéndose al capítulo 3, relativo a las contramedidas del informe del Relator Especial sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales (A/CN.4/597), sugiere que la CDI debería en la medida de lo posible tratar el carácter y los límites de las contramedidas partiendo de la base de que se rigen por el instrumento constitutivo de la organización internacional y que los proyectos de artículos sobre el tema deben aplicarse como normas supletorias. Ese mecanismo garantizaría el respeto de la independencia y personalidad separada de la organización. Los Estados tendrían también, en las primeras etapas formativas, la oportunidad de decidir sobre cuestiones relativas a las contramedidas teniendo presente el carácter de la organización internacional conforme lo determinado por sus miembros.

44. La importancia del proyecto de artículo sobre las obligaciones que no pueden ser afectadas por las contramedidas reside en la identificación individual de las normas del derecho internacional general caracterizadas como imperativas o normas de *jus cogens*. El concepto de *jus cogens* tiene consecuencias más amplias que las de los artículos 53 y 64 de la Convención de Viena de 1969, que limitan la función de una norma imperativa a la consecuencia de que un tratado pasaría a ser nulo y terminaría si estuviera en conflicto con esa norma.

45. El comentario de la CDI en que se explica el proyecto de artículo 46 (A/63/10, párr. 165), no parece incluir el caso en que la obligación quebrantada por una organización internacional es una obligación existente con relación a la “comunidad internacional en su conjunto” o, en otras palabras, el caso de las obligaciones *erga omnes*. El proyecto de artículo contiene un enfoque del *locus standi* a través de la introducción de la categoría de Estado u organización internacional “especialmente afectado”. Debido a la naturaleza *erga omnes* de esas obligaciones, la perspectiva de una multiplicidad de demandas planteadas por Estados especialmente afectados (lesionados) merece atención. Su delegación se pregunta de qué manera se encararían los intereses de los Estados o las organizaciones no especialmente afectados en la invocación de la responsabilidad de una organización internacional con arreglo al párrafo b) i) del artículo 46.

46. **El Sr. Popkov** (Belarús) dice que su delegación espera con interés la pronta conclusión de la labor de la CDI sobre el proyecto de Guía de la práctica, que será

sumamente útil para determinar el uso apropiado por los Estados de las reservas y las declaraciones interpretativas. El Relator Especial y la CDI desean con mucha razón producir un documento equilibrado en que se concilien los distintos enfoques de la codificación de las reservas y las declaraciones interpretativas y que sirva al mismo tiempo como medio para lograr el desarrollo progresivo del derecho internacional de los tratados. Las estrechas relaciones de trabajo entre la Comisión de Derecho Internacional y la Sexta Comisión quedan ilustradas por el hecho de que el proyecto de Guía ha sido en los últimos años revisado extensamente en respuesta a los comentarios de las delegaciones.

47. Su delegación apoya en términos generales el uso ponderado y limitado por los Estados de las reservas a los tratados. Sin embargo, si se usan con exceso, las reservas pueden menoscabar la integridad y la estabilidad de las relaciones convencionales internacionales. Por esa razón, su delegación vacila en crear un precedente para el uso extendido de las reservas y las enmiendas, directa o indirectamente, a las disposiciones básicas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Es preciso que no se considere que la Guía de la práctica fomenta el uso por los Estados de las reservas para promover sus propios intereses nacionales en detrimento de los principales acuerdos internacionales.

48. En períodos de sesiones anteriores de la Asamblea General, su delegación ha expresado sus opiniones sobre la llamada formulación tardía de una reserva, sobre el procedimiento en virtud del cual el depositario reacciona a una reserva incompatible con el objeto y el fin del tratado y sobre otras prácticas nuevas. Se han expresado algunas dudas sobre si las disposiciones sobre esos temas en la Guía de la práctica son compatibles con la Convención de Viena, pero no hay en ellas nada revolucionario. Ahora bien, pueden fomentar el desarrollo de un nuevo derecho consuetudinario internacional e impedir el surgimiento de tendencias indeseables en las relaciones convencionales internacionales.

49. El proyecto de Guía de la práctica debe indicar los fundamentos en el derecho internacional de la práctica de las declaraciones interpretativas unilaterales mediante el establecimiento de la conexión entre las declaraciones interpretativas y los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena. Las declaraciones interpretativas deben considerarse como un medio

básico de lograr un acuerdo sobre la interpretación de una disposición dada. La Guía debe distinguir claramente entre las reservas y las declaraciones interpretativas. Su delegación tiene por eso serias dudas con respecto a la propuesta de crear dos categorías de declaraciones interpretativas, a saber, “simples” y “condicionales”. Las declaraciones interpretativas condicionales son sin duda, a todos los efectos, desde el punto de vista jurídico, reservas. El uso mismo de la palabra “condicional” indica que un Estado ha hecho que su acuerdo en obligarse por un tratado determinado dependa de una reserva que otros Estados están obligados a aceptar. Las declaraciones interpretativas deben considerarse más bien como una forma práctica de eliminar ambigüedades u oscuridades en un tratado o de ajustar los tratados a la legislación nacional.

50. Su delegación comparte la opinión de que el régimen de reservas debe aplicarse también a las declaraciones interpretativas condicionales. El apoyo oficial en la Guía de la práctica del uso de declaraciones interpretativas condicionales podría fomentar el uso de reservas “disfrazadas” formuladas como declaraciones interpretativas condicionales. Esa práctica podría dar lugar a controversias y tener consecuencias negativas para la integridad de los tratados multilaterales, en los cuales no están permitidas las reservas, y los tratados bilaterales, que no reconocen todos la admisibilidad de las reservas.

51. En cuanto atañe a las formas de expresar la aprobación de una declaración interpretativa, considera que no sería correcto adoptar simplemente y en forma general el procedimiento previsto en la Convención de Viena. El mero silencio, no acompañado por el comportamiento correspondiente de conformidad con el artículo 45 de la Convención, no constituye un fundamento suficiente para determinar si un Estado desea aprobar una declaración interpretativa. La CDI debe establecer criterios específicos para indicar la aprobación, que podrían estar integrados por tres elementos desplegados simultáneamente: el silencio, el comportamiento y el paso de un período de tiempo razonable.

52. La cuestión de las consecuencias de las declaraciones interpretativas debe considerarse a la luz del principio del estoppel, que contribuye a la honestidad y la responsabilidad en las relaciones jurídicas internacionales. No debe permitirse que un Estado que ha hecho una declaración interpretativa

pueda posteriormente, sin el acuerdo de otros Estados u organizaciones internacionales que han aprobado la interpretación propuesta, renunciar a su declaración o modificarla. Los Estados o las organizaciones internacionales que han dado su consentimiento a una declaración interpretativa deben estar facultados para declarar inválida esa declaración como resultado de un acuerdo ulterior entre ellos y el que ha formulado una declaración interpretativa.

53. La expresión de una objeción razonada a una declaración interpretativa debe centrarse en la entrada en vigor y la aplicación de las disposiciones respecto de las cuales se ha hecho la declaración interpretativa y no en la propia declaración. Por su naturaleza, las declaraciones interpretativas no tienen ningún efecto jurídico y no tiene sentido entonces tratar las consecuencias de una objeción a una declaración como si fueran similares a las consecuencias de una objeción a una reserva. Las objeciones injustificadas, que pueden estar dictadas por consideraciones puramente políticas, no deben considerarse como si dieran lugar a consecuencias jurídicas. Su delegación espera que la CDI complete su labor sobre las reservas a los tratados en estrecha colaboración con los Estados Miembros, teniendo plenamente en cuenta la práctica internacional y las formas en que podría verse afectada la Guía de la práctica.

54. Refiriéndose al tema de la responsabilidad de las organizaciones internacionales, dice que, en su opinión, la labor de la CDI contribuye en gran medida al desarrollo del concepto de la responsabilidad internacional y el fortalecimiento del fundamento jurídico de las actividades de las organizaciones internacionales. Muchas de las normas jurídicas internacionales sobre la responsabilidad de los Estados son aplicables a la responsabilidad de las organizaciones internacionales. Sin embargo, la responsabilidad de las organizaciones internacionales tiene características específicas debido al carácter jurídico particular de esas organizaciones. En general, en el proyecto de artículos preparado por la CDI se tienen en cuenta satisfactoriamente esas características. Sin embargo, hay algunas deficiencias, que han sido objeto de comentarios críticos en períodos de sesiones anteriores por parte de varias delegaciones, entre ellas la suya. Confía en que el Relator Especial preste la debida atención a esos comentarios en su séptimo informe y proponga enmiendas al proyecto de artículos en relación con el fundamento de la responsabilidad,

las circunstancias que excluyen la responsabilidad, la responsabilidad de una organización internacional en conexión con el hecho de un Estado u otra organización internacional y otras cuestiones.

55. Una organización internacional puede ser responsable de actos ilícitos y plantear demandas en conexión con el daño que le han causado Estados u otras organizaciones internacionales. Estos dos aspectos de la responsabilidad de las organizaciones internacionales deben tenerse plenamente en cuenta en la elaboración del proyecto de artículos sobre los modos de hacer efectiva la responsabilidad.

56. Es lamentable que el proyecto de artículos no se ocupe de la cuestión del recurso a las contramedidas por una organización internacional perjudicada contra un Estado que ha cometido un hecho ilícito. La cuestión no es clara, ya que requiere una distinción entre las contramedidas adoptadas por una organización internacional en conexión con un daño directo que le ha sido causado y las sanciones que podrían imponerse en el ámbito de la competencia de la organización internacional. Sin embargo, la ausencia de proyectos de artículos pertinentes deja una laguna en el derecho de la responsabilidad internacional y podría interpretarse como una restricción a los derechos de las organizaciones internacionales con personería jurídica internacional a plantear demandas en caso de que se les cause un daño.

57. Su delegación comparte la opinión de que las relaciones entre una organización internacional y sus miembros en lo que respecta a las contramedidas no deben tratarse de la misma forma que las relaciones entre una organización internacional y los Estados perjudicados que no son miembros de la organización. Sin embargo, el hecho de que en el proyecto de artículos se prevea el recurso a contramedidas solamente si ello no es incompatible con las normas de la organización en cuestión limita considerablemente, por una parte, la posibilidad de que los Estados miembros, respondan al incumplimiento de sus obligaciones con arreglo a sus estatutos y otros instrumentos jurídicos internacionales por una organización internacional y, por otra parte, obtengan una indemnización adecuada por el daño causado.

58. Se necesitan requisitos más estrictos con respecto a la proporcionalidad de las contramedidas adoptadas por los Estados miembros contra una organización internacional. El recurso a las contramedidas por los

Estados miembros no debe perjudicar el ejercicio de la competencia funcional de la organización internacional en beneficio de los intereses sociales y humanitarios y otros intereses de los miembros que no guardan relación con los hechos ilícitos de la organización. Deben prohibirse las contramedidas de los Estados miembros que puedan perjudicar o paralizar las actividades de la organización.

59. El proyecto de artículo sobre el objeto y los límites de las contramedidas debe especificar claramente el procedimiento para recurrir a las contramedidas, ya que pueden surgir en la práctica situaciones en que las contramedidas no sólo perjudiquen los derechos e intereses de la organización que ha cometido el hecho internacionalmente ilícito sino que afecten también los intereses de los Estados miembros de la organización. Además, se denegaría el beneficio de la cooperación internacional tanto a los Estados que han contribuido a la comisión del hecho internacionalmente ilícito por la organización como a los Estados que se han opuesto activamente a la comisión del hecho. La CDI debe considerar más detalladamente las formas de proteger los derechos de los Estados que no han apoyado la comisión del hecho ilícito.

60. La CDI debe volver a considerar todas las consecuencias de reconocimiento del derecho de una organización internacional a invocar responsabilidad en caso de incumplimiento de una obligación existente en relación con la comunidad internacional en su conjunto. Las normas jurídicas internacionales relativas a la posibilidad de invocar responsabilidad por el incumplimiento de una obligación de este tipo están todavía en las primeras etapas de desarrollo y se relacionan fundamentalmente con la responsabilidad de los Estados. El derecho a invocar responsabilidad por el incumplimiento de una obligación existente en relación con la comunidad internacional no puede otorgarse a todas las organizaciones internacionales sino solamente a las que tienen un carácter casi universal y actividades a nivel mundial, que podrían por tanto alegar que protegen los intereses de toda la comunidad internacional. No hay ninguna razón para otorgar ese derecho a las organizaciones regionales, dado que sus funciones no deben extenderse mucho más allá de la solución de problemas regionales y la protección de los intereses directos de sus Estados miembros.

61. **El Sr. You Ki-Jun** (República de Corea), refiriéndose a las reservas a los tratados, dice que su delegación apoya el consenso de la CDI en no apartarse de las disposiciones pertinentes de las Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986 y destacar que en la Guía de la práctica es preciso evitar el uso excesivo de nuevos términos que eran desconocidos cuando se formalizaron esas convenciones.

62. La CDI debe reevaluar su decisión de 2001 y considerar si deben mantenerse intactas las directrices sobre declaraciones interpretativas condicionales, en lugar de sustituirlas por una sola directriz en que esas declaraciones se asimilen a las reservas. El proyecto de directriz 2.1.9 dispone que, en lo posible, una reserva debería indicar los motivos por los cuales se hace. Sin embargo, el artículo 19 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados no exige esas razones. El proyecto de directriz 2.6.5 dispone que podrá formular una objeción todo Estado contratante o toda organización internacional contratante facultado para llegar a ser parte en el tratado, mientras que el artículo 20 de la Convención de Viena de 1969 se refiere simplemente a “otro Estado contratante”. El proyecto de directriz 2.9.3 define la “recalificación”, que, según el Relator Especial, es solamente uno de los cuatro tipos de reacciones a las declaraciones interpretativas. Sin embargo, su delegación considera que no sería prudente introducir términos no convencionales en la Guía de la práctica porque podría ocurrir que la CDI estuviera realmente reinventando el régimen de la Convención de Viena.

63. Para bien o para mal, las reservas son necesarias para asegurar la participación de muchos Estados en los regímenes convencionales, y sería contraproducente adoptar límites exageradamente restrictivos para ellas. Hay que tratar de llegar a un equilibrio entre una amplia participación de los Estados en los tratados multilaterales y el mantenimiento de la unidad en los regímenes convencionales.

64. La conclusión satisfactoria de la labor sobre el tema de la responsabilidad de las organizaciones internacionales recordaría los logros de la CDI con respecto a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. La responsabilidad de las organizaciones internacionales y la responsabilidad de los Estados son los dos pilares de la responsabilidad internacional por los hechos internacionalmente ilícitos, y su delegación cree que esa responsabilidad debe determinarse en el

marco de un sistema básicamente uniforme, comparable con las relaciones entre los tratados entre Estados y los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. Aunque puede haber ciertas diferencias inherentes entre los Estados y las organizaciones internacionales, la limitación de las contramedidas en el caso de las organizaciones internacionales a “diferir el cumplimiento de obligaciones contraídas en virtud de una relación convencional en la que participase la organización” no es lo mismo que la denegación completa de las contramedidas a las organizaciones internacionales.

65. En lo concerniente a la expulsión de los extranjeros, su delegación pone de relieve que la prohibición absoluta de la expulsión por un Estado de sus propios nacionales es un principio jurídico internacional bien establecido que encuentra apoyo en varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Considera por eso que la CDI debe concentrarse en la expulsión de los extranjeros y no en cuestiones de nacionalidad o privación de la nacionalidad.

66. **El Sr. Duan Jielong** (China), refiriéndose al tema de las reservas a los tratados, dice que el proyecto de directrices 2.6.5 (“Autor”) establece que podrán formular una objeción a una reserva dos categorías de entidades: el Estado contratante o la organización internacional contratante, y cualquier Estado u organización internacional facultado para llegar a ser parte en el tratado. No tiene objeciones a la primera categoría, pero sí algunas dudas sobre el derecho de los dos últimos a formular objeciones antes de pasar a ser una parte contratante, dado que esa declaración no tiene ningún efecto jurídico antes de que un Estado o una organización internacional consienta en obligarse por un tratado. El proyecto de directrices no tiene necesariamente que prever un acto que no tiene ningún efecto jurídico. Además, si se reconoce el derecho de un Estado o una organización internacional a formular objeciones a una reserva hecha por un Estado contratante antes de que este último pase a ser parte en un tratado se plantearían algunas cuestiones jurídicas, entre ellas si el Estado o la organización internacional que formula la objeción está obligado a notificar al depositario del tratado de conformidad con las disposiciones del tratado, y si el depositario del tratado está obligado a distribuir esa objeción a las partes contratantes.

67. Su delegación encuentra en general satisfactorio el proyecto de directrices sobre las declaraciones interpretativas, pero cree que cabría mejorar el segundo párrafo del proyecto de directriz 2.9.9. En primer lugar, es preciso aclarar su relación con el proyecto de directriz 2.9.8, dado que éste último prevé que no se presume la aprobación de una declaración interpretativa o la oposición a ella, que el primero tiene el efecto evidente de hacer presunciones sobre una declaración interpretativa. En segundo lugar, se pregunta si alguna base en la práctica de los Estados para presumir que el silencio implica aquiescencia y, en caso afirmativo, en qué circunstancias se consideraría apropiado hacer esa presunción y qué factores deberían tenerse en cuenta.

68. Los ocho proyectos de artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales aprobados por la CDI siguen básicamente, por analogía, la redacción de las disposiciones correspondientes sobre la responsabilidad de los Estados, con apoyo en las opiniones y la práctica de unas pocas organizaciones internacionales, como la Unión Europea. Ese enfoque tiene sus méritos, dado que algunas reglas aplicables a una situación podrían aplicarse a una situación similar *mutatis mutandis*, y hay numerosas similitudes entre la responsabilidad de los Estados y la responsabilidad de las organizaciones internacionales. Sin embargo, la extensión por analogía sólo puede aplicarse a la responsabilidad de las organizaciones internacionales en circunstancias similares. No es apropiado hacer extensivas las normas contenidas en el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados que son controversiales y no encuentran apoyo en la práctica internacional a la responsabilidad de las organizaciones internacionales. Además, la cuestión de la responsabilidad de los Estados y otros sujetos de derecho internacional guarda relación con la aplicación del derecho internacional y podría así prejuzgar acerca del derecho de los sujetos de derecho internacional. En consecuencia, la CDI debe actuar con más prudencia cuando recurre a la extensión por analogía del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados.

69. En cuanto a la cuestión de la forma de invocar responsabilidad cuando hay una pluralidad de Estados y organizaciones internacionales responsables, el segundo párrafo del proyecto de artículo 51 prevé la

invocación de responsabilidad por un Estado lesionado o una organización internacional lesionada, diferenciando entre la “responsabilidad primaria” de la organización internacional responsable y la “responsabilidad subsidiaria” de los miembros de esa organización. Su delegación considera que ese orden de invocación no es apropiado para una norma general. Como mínimo, en todos los casos abarcados por los artículos 25 a 28, un Estado lesionado o una organización internacional lesionada debe tener derecho a decidir el orden en que invoca la responsabilidad del Estado o de la organización internacional responsable.

70. El proyecto de artículo 52 se refiere a la invocación de la responsabilidad por un Estado o una organización internacional que no sea un Estado lesionado o una organización internacional lesionada, y su delegación cree que es pertinente para la cuestión de las contramedidas. Si un tercer Estado o una tercera organización internacional tiene derecho a invocar la responsabilidad, se plantea la cuestión de determinar si tiene también derecho a adoptar contramedidas. En consecuencia, el proyecto de artículo debe considerarse junto con los proyectos de artículos relativos a las contramedidas, que la CDI ha examinado pero aún no ha aprobado. No hay ninguna práctica establecida sobre la invocación de la responsabilidad de las organizaciones internacionales por un tercer Estado o una tercera organización internacional y hay mucha controversia con respecto a ese enfoque, incluso en el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados.

71. En cuanto a la cuestión de si una organización internacional está facultada para tomar contramedidas y si pueden adoptarse esas medidas contra una organización internacional, o incluso si el proyecto de artículos debe contener disposiciones sobre contramedidas, su delegación considera que la inclusión de contramedidas bajo la responsabilidad de las organizaciones internacionales es problemática. Las organizaciones internacionales son diferentes de los Estados porque representan un cierto grado de convergencia de Estados como sujetos independientes en un mundo descentralizado, en tanto que las contramedidas están destinadas principalmente a una comunidad internacional no organizada y poco conectada. La introducción del concepto de contramedidas en el régimen que rige la responsabilidad de las organizaciones internacionales está en conflicto con la función que desempeñan las

organizaciones internacionales de coordinar la comunidad internacional. La CDI debe actuar por esa razón con muchísima cautela al introducir contramedidas.

72. **La Sra. Ruiz Cerutti** (Argentina) dice que en su 60° período de sesiones, la CDI avanzó significativamente en su labor sobre las declaraciones interpretativas, un tema sobre el cual las Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986 guardan silencio, y que reviste particular importancia en los casos de tratados que prohíben la formulación de reservas. En términos generales, la Argentina está de acuerdo con el contenido de los proyectos de directrices propuestos y comparte el enfoque escogido de no trasladar a las declaraciones interpretativas las normas aplicables a las reservas, aun cuando el silencio de los textos y la escasez de la práctica relativa a las primeras invitan a inspirarse en el régimen jurídico de las reservas.

73. La Argentina concuerda especialmente con el texto propuesto para la definición de la facultad de formular oposición a una declaración interpretativa incluida en la directriz 2.9.2, en el sentido de que permite que los Estados no se limiten simplemente a oponerse a los términos de la declaración interpretativa sino que pueden efectuar otras propuestas interpretativas. Considera asimismo que la redacción de la directriz 2.9.3 recoge un elemento fundamental de la facultad de oponerse a una declaración interpretativa al reconocer a los Estados la posibilidad de recalificar las declaraciones interpretativas formuladas por otros cuando se pueda considerar que se trata de “reservas encubiertas” en razón de los efectos jurídicos que tienen por objeto producir. Es sumamente importante tener en cuenta esta directriz a la hora de analizar las declaraciones interpretativas formuladas respecto a tratados que no permiten o prohíben expresamente la formulación de reservas, como los relativos a la protección de los individuos, y, en ese sentido, resulta esencial la posibilidad introducida en el segundo párrafo del proyecto de directriz para que los Estados y las organizaciones internacionales tengan en cuenta a la hora de analizar y de, eventualmente, recalificar una declaración interpretativa, los proyectos de directrices 1.3 a 1.3.3, que se refieren a la distinción entre reservas y declaraciones interpretativas. Considera asimismo que la redacción de la directriz 2.9.4 recoge adecuadamente la facultad de los Estados de poder reaccionar en cualquier momento frente a una declaración interpretativa, incluso con anterioridad a la

entrada en vigor para el autor de la aprobación, recalificación u oposición del instrumento convencional frente al que se formulara.

74. La delegación de la Argentina considera especialmente relevante el criterio referido a la falta de presunción de la aprobación o la oposición a las declaraciones interpretativas expresado en la directriz 2.9.8, ya que refleja una característica particular que distingue a las declaraciones interpretativas de las reservas, en cuanto a que los Estados no tienen la obligación de reaccionar respecto de las primeras. Ese mismo criterio se encuentra reflejado acertadamente en el primer párrafo de la directriz 2.9.9. Sin embargo, su delegación coincide con el Relator Especial en cuanto a que este principio debe considerarse de manera flexible, como lo refleja el segundo párrafo de la directriz 2.9.9, aunque tal vez sea necesario profundizar la búsqueda de una definición más precisa de lo que se entiende por “circunstancias particulares” a fin de evitar confusiones respecto a la aplicación del proyecto de directriz. Respecto a la directriz 2.9.10, relativa a las reacciones a las declaraciones interpretativas condicionales, está de acuerdo con el carácter provisorio de su nueva redacción, ya que coincide en que resulta prematuro pronunciarse respecto a si este tipo de manifestaciones constituyen, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, declaraciones interpretativas o reservas. Sin perjuicio de lo que antecede, cabe tener presente que tal distinción debe efectuarse teniendo siempre en cuenta si tienen por objeto modificar o no los efectos jurídicos de las disposiciones convencionales.

75. Sobre el tema de la responsabilidad de las organizaciones internacionales, complace a su delegación el hecho de que el sexto informe del Relator Especial (A/CN.4/597) siga, las líneas generales de los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente lícitos. La mayoría de la doctrina internacional reconoce que las normas que gobiernan la responsabilidad de los Estados pueden ser aplicadas a las organizaciones internacionales, una vez efectuadas las adaptaciones necesarias. En este sentido, vale la pena recordar el informe del Secretario General de 1996 sobre los aspectos administrativos y presupuestarios del financiamiento de las operaciones del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (A/51/389). Además, el planteo general y flexible del proyecto de artículos permite su adaptación a la gran variedad de organizaciones internacionales.

76. Su delegación apoya las disposiciones de los artículos relativos a la invocación de responsabilidad por un Estado lesionado o una organización internacional lesionada, la notificación de la reclamación por un Estado lesionado o una organización internacional lesionada y la admisibilidad de la reclamación, que siguen en líneas generales las disposiciones correspondientes del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados. Concuera en particular con la necesidad de que se respeten las normas aplicables en materia de nacionalidad de las reclamaciones y la necesidad del agotamiento de todas las vías de recursos disponibles y efectivas proporcionadas por la organización contra la cual se reclama cuando la reclamación está sujeta a una norma que requiere el agotamiento de los recursos internos. La flexibilidad de la redacción de estas disposiciones permite su adaptación a diferentes tipos de organizaciones.

77. Con respecto a la pérdida del derecho a invocar la responsabilidad, su delegación entiende que, si bien las disposiciones del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados son aplicables a la responsabilidad de las organizaciones internacionales en lo concerniente al órgano de la organización internacional competente para renunciar a la reclamación, deberán tenerse en cuenta las propias normas de la organización.

78. Su delegación está de acuerdo con la formulación de los proyectos de artículos 50 y 51 que siguen, en general, la redacción de los artículos correspondientes sobre la responsabilidad de los Estados. Con respecto al artículo 51, es importante tener en cuenta el principio básico de que la organización tiene una personalidad jurídica distinta y separada de la de sus miembros y que en consecuencia, una eventual responsabilidad concurrente o subsidiaria del Estado miembro dependerá de las características específicas y las reglas de la organización. Apoya en general el artículo 52 relativo a la invocación de responsabilidad por una entidad distinta de un Estado lesionado o una organización internacional lesionada. Sin embargo, una organización internacional no lesionada sólo podrá reclamar por la violación de una obligación que afecta a la comunidad internacional en su conjunto cuando se le ha conferido la función de proteger los intereses de la comunidad internacional. Además, esta organización debería tener vocación universal o un número representativo de Estados miembros a fin de poder

estar legitimada para reclamar por una violación de una obligación que afecta a la comunidad internacional en su conjunto.

79. Los debates de la CDI sobre las contramedidas giraron principalmente en torno a la procedencia de autorizar su adopción por Estados u organizaciones internacionales lesionados contra una organización internacional responsable de la violación de una obligación internacional, y este es un tema que debe abordarse con suma cautela. Su delegación aprecia los esfuerzos del Grupo de Trabajo, que llegó a la conclusión de que era aconsejable que el proyecto regulara adecuadamente las condiciones y los límites del recurso a esas contramedidas, teniendo en cuenta las características particulares de las organizaciones internacionales.

80. **El Sr. Witschel** (Alemania) dice, refiriéndose a las cuestiones contenidas en el párrafo 26 del informe, que las declaraciones interpretativas “simples”, como se denominan en el informe, no deben tratarse como reservas, tal como se definen éstas en el artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Sin embargo, en ausencia de una explicación, es difícil saber cómo debe interpretarse el silencio de un Estado en respuesta a una declaración interpretativa. Esta es probablemente la razón de la exigüidad práctica de los Estados. En todo caso, el silencio no puede interpretarse como una respuesta que haga que la declaración resulte obligatoria para el Estado interesado. Los Estados no tienen ninguna obligación de reaccionar a las declaraciones interpretativas y esas declaraciones no pueden tampoco limitar los derechos de otras partes. Sin embargo, el silencio tiene un efecto jurídico en los casos en que, de acuerdo con la práctica general de los Estados, cabría esperar una protesta contra la interpretación dada por parte del Estado o la organización internacional interesado. En esas circunstancias, se considera que la parte que no protesta ha consentido. El fallo de la Corte Internacional de Justicia en el asunto *North Atlantic Coast Fisheries* es especialmente pertinente a este respecto. En cuanto a la pregunta contenida en el párrafo 26 c), el silencio no puede describirse como parte de los efectos jurídicos de una declaración; es más bien una reacción a esa declaración y en consecuencia un requisito previo de cualquier efecto jurídico.

81. Con respecto a las consecuencias de una declaración interpretativa para su autor (párr. 27 a)), en

su opinión, el autor queda obligado solamente después de que otra parte se ha basado en la declaración, por ejemplo, expresando su aprobación. Si la aprobación no se ha dado expresamente, podría aplicarse el principio del estoppel. En cuanto a las consecuencias para un Estado o una organización internacional que ha aprobado la declaración (párr. 27 b)), la interpretación expresada en la declaración es, en su opinión, vinculante entre un Estado o una organización internacional que ha aprobado la declaración y su autor. La situación es análoga a la que se encuentra en el párrafo 3 a) del artículo 31 de la Convención de Viena.

82. En cuanto a la cuestión relativa a las consecuencias de una declaración interpretativa para un Estado o una organización que ha expresado oposición a la declaración, esa oposición puede limitar o puede excluir las consecuencias jurídicas deseadas de la declaración, conforme se establece en el proyecto de directriz 2.9.2, no obstante una controversia no resuelta entre una parte y el autor de una declaración no hace que la disposición en cuestión, o de hecho todo el tratado, sea inaplicable entre las dos partes.

83. Sus respuestas a las preguntas anteriores cubren también en alguna medida la pregunta contenida en el párrafo 28. Sin embargo, cabe añadir que es necesario el consentimiento de todas las partes a una declaración interpretativa si se quiere aplicar la analogía entre el párrafo 3 a) del artículo 31 de la Convención de Viena. Ese acuerdo debería tenerse en cuenta cuando se interpreta un tratado, siempre que lo permitan las reacciones de las demás partes.

84. La labor de la CDI sobre la responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales se ha beneficiado sin duda de sus trabajos sobre la responsabilidad de los Estados. Aunque apoya la declaración de la Unión Europea, en particular su conclusión de que el proyecto de artículos es satisfactorio, desea hacer algunas observaciones sobre varias cuestiones. En primer lugar, con respecto a la invocación de la responsabilidad de las organizaciones internacionales, su delegación cree que, aunque una violación del derecho internacional por una organización internacional puede concebirse sólo en circunstancias limitadas, una norma como la establecida en el proyecto de artículo 52 es necesaria para la coherencia global del derecho sobre la responsabilidad en general. Sin embargo, sería innecesario aplicarla a todas las organizaciones

internacionales, independientemente de sus funciones. A diferencia de los Estados, las organizaciones internacionales no tienen una personalidad jurídica internacional general sino solamente competencias funcionales relacionadas con sus mandatos. Aprueba por eso la decisión de la CDI de estipular que la facultad de invocar la responsabilidad de una organización internacional existe solamente si las funciones de la organización internacional de que se trata incluyen la salvaguardia de los intereses de la comunidad internacional.

85. No parece ser práctica frecuente, o siquiera establecida, que las organizaciones internacionales recurran a contramedidas en respuesta a hechos internacionalmente ilícitos de organizaciones internacionales, fuera del caso de la Organización Mundial del Comercio. La opción de adoptar contramedidas debe con todo existir, dado que la capacidad de las organizaciones internacionales de cumplir sus mandatos quedaría de otra forma disminuida. Al mismo tiempo, el uso de contramedidas debe limitarse, teniendo en cuenta el gran número y variedad de organizaciones internacionales. Es preciso establecer normas claras sobre cuándo y en qué condiciones podrían adoptarse contramedidas contra una organización internacional o por una organización internacional.

86. Las medidas adoptadas por una organización internacional de conformidad con sus normas internas no pueden considerarse contramedidas. Son en cambio una forma de sanciones, que se rigen por un conjunto específico de normas, como las impuestas por el Consejo de Seguridad. Por otra parte, hay una práctica considerable —gran parte de ella proveniente de la Unión Europea— relativa a las contramedidas adoptadas por una organización internacional contra un Estado no miembro a raíz de una violación de obligaciones *erga omnes* con arreglo al derecho internacional. Esto sugiere en todo caso que las relaciones entre una organización internacional y sus Estados miembros deben tratarse en forma diferente de la que existe entre la organización y los Estados no miembros. Lo mejor sería no permitir la adopción de contramedidas por las organizaciones internacionales contra los Estados. El Relator Especial ha optado con razón por la inclusión de normas especiales sobre las contramedidas en los proyectos de artículos en lugar de incluir simplemente una cláusula “sin perjuicio de”. De otra manera, no habría ninguna oportunidad para

declarar, como se implica en la redacción actual del proyecto de artículo 55, que, como norma general, las contramedidas no tienen lugar en las relaciones entre una organización internacional y sus miembros.

87. **La Sra. Von Wirén** (Estonia) expresa, refiriéndose a las reservas a los tratados, la apreciación de su delegación por la labor de la CDI sobre la Guía de la práctica, y especialmente las directrices 2.3 (Reservas tardías), 2.4 (Procedimiento relativo a las declaraciones interpretativas), y 3.1 (Validez material de una reserva), ya que la doctrina existente es contradictoria y una mayor claridad sería muy bienvenida. El proyecto de Guía de la práctica es ya una fuente valiosa para los aspectos no regulados o insuficientemente regulados en las Convenciones de Viena. Sin embargo, le preocupan algunos aspectos de carácter jurídico de las reservas tardías. Considera que esas reservas no están permitidas con arreglo a las Convenciones de Viena, que disponen que una reserva sólo puede hacerse en oportunidad de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a un tratado. Sin embargo, le complace que en el informe de la CDI se reserve la posibilidad de presentar objeciones a la formulación tardía de una reserva, con la consecuencia de que la reserva no tendría efecto jurídico.

88. Los trabajos más recientes de la CDI sobre las reservas arrojarán luz sobre las normas relativas a las declaraciones interpretativas, que no se encaran en las Convenciones de Viena. El informe se ocupa también del tema de la recalificación, que se utiliza con frecuencia en la práctica de los Estados, y las directrices sobre ese tema serán muy apreciadas. Sin embargo, su delegación no está enteramente de acuerdo con la propuesta contenida en el proyecto de directriz 2.9.4 de que no haya ningún plazo para la formulación de una recalificación. En su práctica, Estonia tiende a aplicar el plazo de 12 meses, al igual que en el caso de las objeciones a las reservas. Además, cabe dudar de que pueda justificarse la calificación de las declaraciones con el fin de modificar los efectos jurídicos de un tratado (las llamadas declaraciones interpretativas condicionales) como subcategoría de las declaraciones interpretativas. Las declaraciones interpretativas se parecen a las reservas y por tanto pueden ser calificadas como una subcategoría de reservas, porque su objetivo es aclarar el significado de algunas disposiciones de un tratado sin tener efecto jurídico sobre las relaciones contractuales, en tanto que

el propósito de las declaraciones interpretativas condicionales es modificar los efectos jurídicos del tratado.

89. Por último, su delegación cree que, para los Estados Miembros, el efecto jurídico de las objeciones es otro aspecto importante del tema de las reservas de los tratados. Las normas establecidas en las Convenciones de Viena deben desarrollarse en la Guía de práctica para hacer que sea más fácil para los Estados lograr el efecto deseado de sus objeciones. Su delegación considera que el efecto jurídico que los Estados desean lograr con su objeción es a menudo diferente del que se describe en las Convenciones de Viena. La práctica de los Estados confirma esa opinión, dado que las objeciones con frecuencia incluyen la expresión “por lo tanto, el convenio entrará en vigor entre los dos Estados sin que [el Estado] pueda invocar la reserva”. Parece haber incluso una nueva norma de derecho consuetudinario que modifica las establecidas en las Convenciones de Viena, y es apropiado que la CDI tome este aspecto en consideración.

90. **El Sr. Dufek** (República Checa) encomia los proyectos de artículos 46 a 51 sobre la responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales, que reproducen básicamente los artículos correspondientes del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados. La práctica de los Estados y las organizaciones internacionales apoya la opinión de que una organización internacional está facultada para invocar la responsabilidad internacional al igual que los Estados.

91. Sin embargo, en lo que respecta al proyecto de artículo 52, que corresponde al artículo 48 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, la práctica de los Estados no es muy indicativa y la doctrina parece estar profundamente dividida. Los únicos ejemplos significativos presentados en el informe se refieren a la Unión Europea, que es una organización bastante excepcional de integración regional. La CDI debe por eso concentrarse en la codificación del derecho internacional en áreas donde ya hay una extensa práctica de los Estados, precedentes y doctrina. En su forma actual, el proyecto de artículo 52 no refleja plenamente la diferencia crucial entre los Estados y las organizaciones internacionales, a saber, que las últimas sólo tienen una personalidad jurídica funcional y especializada. Por la misma razón, una violación de las obligaciones internacionales debe considerarse en términos de un

acto *ultra vires*, en el sentido de que está completamente fuera del ámbito de competencia de la organización. Su delegación se reserva su posición sobre la cuestión hasta que el Relator Especial haya publicado su séptimo informe, que debería aclarar varias incertidumbres con respecto a la responsabilidad de los Estados en conexión con un hecho de una organización internacional.

92. Dada la limitada práctica de los Estados, es preciso actuar con prudencia cuando se consideran las contramedidas, en particular tal como el tema se refleja en el proyecto de artículo 52 (51). Si bien una organización internacional puede recurrir a contramedidas en determinadas circunstancias, esas medidas son elementos de la aplicación descentralizada de la ley que es inherente a las relaciones interestatales. Sólo debe permitirse mediante las contramedidas que una organización internacional difiera el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con arreglo a un tratado. En cuanto a las llamadas relaciones verticales, es decir, las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad o por organizaciones regionales, ellas entrañan un régimen jurídico que depende esencialmente de las normas de la organización y puede ser diferente del régimen general de las contramedidas en virtud de los artículos sobre la responsabilidad de los Estados. Sería también recomendable considerar por separado las relaciones de una organización internacional con sus miembros y con sus no miembros.

93. Pasando al tema de la expulsión de los extranjeros, dice que las nacionalidades múltiples son cada vez más comunes. Aprueba por eso la decisión de la CDI de concentrarse en la cuestión de la expulsión de las personas con doble nacionalidad o nacionalidad múltiple. Sobre la base de la práctica de los Estados, el Relator Especial, concluyó en su cuarto informe (A/CN.4/594) que el principio de la no expulsión de los nacionales no se aplica a las personas con doble nacionalidad o nacionalidad múltiple en los casos en que la expulsión no daría por resultado la apatridia. Su delegación no comparte esa opinión. Con arreglo a la legislación checa, una persona que tiene la nacionalidad checa y una nacionalidad extranjera se considera un nacional checo y su expulsión está por lo tanto absolutamente prohibida. Las personas con doble nacionalidad o nacionalidad múltiple están además protegidas contra la expulsión de todos los Estados de que son nacionales. Es verdad que su expulsión no está

expresamente prohibida en ningún tratado internacional, pero es sin duda inadmisibles con arreglo a varios instrumentos de derechos humanos. Por esa razón, el proyecto de artículos debe poner de relieve que la prohibición de esa expulsión es absoluta, sin excepciones. De manera análoga, el Relator Especial dice en su informe que la nacionalidad dominante o efectiva de una persona es importante para determinar la legalidad de una expulsión. Una vez más, la República Checa, que aboga por la prohibición absoluta de la expulsión de los nacionales, no ve la necesidad de determinar la nacionalidad dominante o efectiva de una persona ante la posibilidad de su expulsión. La legislación checa no permite tampoco la privación de la nacionalidad de las personas con nacionalidad doble o múltiple en preparación para la expulsión, dado que ello violaría sus derechos humanos. En lugar de proteger el Estado y sus intereses, la medida se utiliza a menudo con fines ilegítimos, como la expropiación o la discriminación contra determinados grupos. La privación arbitraria de la nacionalidad está prohibida en instrumentos regionales y universales de derechos humanos.

94. **El Sr. Astraldi** (Italia) dice que no todas las cuestiones relativas a las reservas a los tratados merecen verdaderamente el tiempo que se les dedica en la CDI. Esto se aplica en particular a las declaraciones interpretativas que, aunque dan lugar a algunas cuestiones interesantes, no pueden considerarse reservas y podrían muy bien omitirse del ámbito del estudio actual.

95. La mayor parte de los proyectos de directrices contenidos en la Guía de la práctica parecen aceptables. Sin embargo, el proyecto de directriz 2.6.13 es demasiado rígido; un plazo de 12 meses para presentar una objeción parece implicar la presunción de la aceptación de una reserva cuando no se ha presentado una objeción dentro de los 12 meses. Esas objeciones se han hecho muchas veces después de transcurrido el plazo de 12 meses, conforme lo reconoce la CDI en su comentario al proyecto de directriz 2.6.15. Los proyectos de directrices 2.6.13 y 2.6.15 deben reflejar la práctica en lugar de hacer automáticamente inadmisibles las reservas efectivas tras la expiración del plazo de 12 meses.

96. El proyecto de artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales es en general aceptable, con la adición del proyecto de artículo 48 sobre la admisibilidad de las reclamaciones. Parece

haber poca justificación para adoptar las organizaciones internacionales un enfoque diferente del que se sigue en el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados. La CDI debe tener esto presente a fin de llenar la laguna existente en el proyecto de artículo 19 sobre las circunstancias que excluyen la ilicitud.

97. Con respecto al proyecto de artículos sobre las contramedidas, cree que debe hacerse una distinción entre las organizaciones internacionales y los Estados en cuanto a las medidas adoptadas en respuesta al incumplimiento de una obligación existente con relación a la comunidad internacional en su conjunto. Su delegación comparte la opinión expresada en el párrafo 140 del informe de que esa organización sólo debe estar facultada para adoptar contramedidas si se le ha conferido el mandato de proteger los intereses generales en que se fundamente la obligación en cuestión.

98. Su delegación comparte la opinión de que el estudio de la expulsión de los extranjeros no es un instrumento apropiado para embarcarse en un debate sobre las leyes que rigen la nacionalidad. Apoya la opinión de la CDI de que un Estado no puede expulsar legalmente a un nacional, aunque éste tenga una segunda nacionalidad. Tampoco debe eludirse la prohibición de la expulsión de los nacionales mediante la privación de la nacionalidad a una persona con el fin de expulsarla. Se trata de una regla importante que debe incluirse en un proyecto de artículo.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.